

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia  
JUZGADO : 17º Juzgado Civil de Santiago  
CAUSA ROL : C-4033-2021  
CARATULADO : MUTUALIDAD DE  
CARABINEROS/VILLALOBOS

**Santiago, dieciocho de Marzo de dos mil veinticuatro**  
**VISTOS:**

Con fecha 28 de abril de 2021, mediante presentación ingresada a través de la oficina judicial virtual, comparece René Rodrigo Ureta Toledo, en representación de Mutualidad de Carabineros de Chile, ambos domiciliados en Avenida Bulnes 157, tercer piso, comuna de Santiago, quien interpone demanda en juicio ordinario de cobro de pesos en contra de Bruno Arnoldo Villalobos Krumm, domiciliado en Av. Las Tranqueras 177, Departamento 609, comuna de Las Condes, por los siguientes argumentos.

Expone que la Mutualidad de Carabineros o “la Mutualidad” es una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro, regida por el Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil, que, según sus estatutos sociales tiene por objeto principal mantener y administrar los seguros de vida que deben contratar todas las personas que presten servicios en Carabineros de Chile o en la Policía de Investigaciones de Chile. Además, según lo dispuesto en el artículo 7 y 8 de la Ley 18.660, participa del mercado de seguros de vida, e interviene en el mercado de seguros generales y en la oferta de otros productos, de acuerdo al Decreto Ley N° 1.092 de 1975 del Ministerio de Hacienda, estando bajo la supervisión de la Comisión para el Mercado Financiero.

Explica que, considerando lo anterior, se consideró por mucho tiempo que se le aplicaba de forma subsidiaria la Ley de Sociedades Anónimas y su reglamento, motivo por el cual se autorizó el pago de dieta, retribución o estipendios en favor de los Directores del Consejo de Administración, la cual era aprobada por la respectiva Junta General Ordinaria de Asegurados, la que para estos efectos operaba de modo similar a la de una Junta de Accionistas.

Agrega que no existía norma que impidiera percibir una dieta, remuneración, pagos o retribución alguna en su calidad de Consejeros, hasta la dictación de la Ley 20.500, del año 2011, que incorpora el artículo 551-1 al Código Civil, que estableció la gratuidad del cargo de los consejeros de un Consejo de Administración en una persona jurídica sin fines de lucro.

Respecto del demandado, señala que se desempeñó como Consejero entre septiembre de 2015 y marzo de 2018, y que, en tal calidad y sin justificación legal, percibió por concepto de retribuciones y dietas, la suma total de \$44.822.975.-



Foja: 1

Sobre el derecho, invoca el artículo 1437 del Código Civil, y el artículo 16 del Estatuto Social de la Mutualidad, que otorga la calidad de asegurado al demandado, el que, al tener la calidad de miembro activo de la Mutualidad de Carabineros, en su calidad de Consejero, debía dar cumplimiento a todas las obligaciones que le imponían los Estatutos Sociales, entre ellas, la obligación de abstenerse de recibir retribuciones económicas por parte de Mutualidad.

Afirma que en atención a esto, y a la prohibición del artículo 551-1 del Código Civil, el demandado debe restituir las sumas percibidas indebidamente, atendida su calidad de Consejero. Agrega que, estando prohibida la onerosidad de las gestiones desempeñadas en el cargo, los pagos recibidos adolecen de causa ilícita, de acuerdo al artículo 1467 del Código Civil.

Sostiene que el demandado no puede alegar desconocimiento de esto conforme al artículo 3° del Código Civil, en relación con lo dispuesto por la Ley 20.500.

En subsidio, y en el evento que se estime que el pago efectuado no tiene fuente contractual, interpone acción de repetición por pago de lo no debido, conforme a lo dispuesto en los artículos 2295 y 2299 del Código Civil, en cuanto el demandado recibió pagos por parte de la Mutualidad de Carabineros, sin que esta se encontrara obligada a ello, los cuales no tendrían fuente ni legal ni contractual y solo se habrían producido por un error de la demandante, al considerar que por ejercer giro de seguros, debía comportarse como dichas compañías regidas y reguladas por la Ley de Sociedades Anónimas.

Previas citas legales, solicita se tenga por interpuesta la demanda de cobro de pesos, se declare que las sumas de dinero percibidas por el demandado se encontraban prohibidas por ley, y que se le condene a restituir la suma de \$44.822.975.- a Mutualidad de Carabineros, o a aquella que determine este Tribunal conforme al mérito del proceso, y, en subsidio, que se declare el pago de lo no debido, y se condene al demandado a restituir a la Mutualidad la suma de \$44.822.975.- o a aquella que determine este Tribunal conforme al mérito del proceso, en ambos casos con expresa condena en costas.

A folio 10, consta haberse notificado la demanda con fecha 22 de septiembre de 2021, de acuerdo al artículo 44 del Código de Procedimiento Civil.

Con fecha 19 de octubre de 2023, a folio 18, rectificado con fecha 13 de enero de 2022, a folio 24, comparece don Luis Ahumada Castillo, abogado, en representación de don Bruno Arnoldo Villalobos Krumm, quien contesta la demanda de cobro de pesos y en subsidio acción de repetición por pago de lo no debido interpuesta por la Mutualidad de Carabineros, solicitando se rechacen en todas sus partes, con expresa condena en costas.



Foja: 1

Realiza una reseña histórica de la Mutualidad de Carabineros y sus elementos jurídicos orgánicos, señalando que nació formalmente como una corporación, pero que a lo largo de los años la actividad aseguradora, tiene y ha tenido tintes de significación regulatoria, que lo acercan más bien a una institución financiera. Señala que, dadas sus características, excede los fines y restricciones de la ley N° 20.500 sobre “Asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública”, según se desprende del artículo 7 de la Ley N° 18.660 de 1987, que dispone que las mutuales podrán continuar en sus negocios y se sujetarán a las normas de su propia legislación y a las del decreto con fuerza de ley N° 251, de 1931; el Art. 6 del D.F.L. 251 que comprende como compañía de seguros a todas las sociedades anónimas nacionales de seguros; y el artículo 50 inciso segundo del D.F.L. 251, que dispone que administradores y gerentes de la compañía de seguros estarán sujetos a las mismas normas que los directores y gerentes de sociedad anónimas abiertas.

Señala que el motivo de esta acción es por el “rebote” de otros hechos mediáticos en la institución de Carabineros que no tienen relación ni con el demandado ni con la Mutualidad, que incluso ha provocado hostilidades hacia los ex consejeros, que fueron desprestigiados en medios de comunicación social por la viralización de las acciones iniciadas por la Mutualidad.

Citando jurisprudencia administrativa, sostiene que la Contraloría General de la República se ha pronunciado sobre la falta de conciliación de altos cargos directivos y ser a la vez consejero de administración, agregando que no puede fiscalizar a la Mutualidad por no haber activos públicos comprometidos, y destaca que este organismo nunca prescribió ni ordenó devolver dineros por este concepto, de acuerdo a los artículos 1468, 1397, y 2299 del Código Civil.

Por lo demás, cuando se refiere a la prohibición de recibir remuneraciones, no ordena la restitución de lo ya percibido, si no que veda las remuneraciones a futuro.

Asevera que la Mutualidad, en conocimiento de la regla de prohibición del artículo 551-1 del Código Civil, y no estando obligada al pago, ejecutaba actos de liberalidad y de atribución donatoria a los ex consejeros. Agrega que el pago de acuerdo al artículo 1569 del mismo Código, les deja fuera de la esfera de aplicación de la Ley N° 20.500, en relación con el artículo 551-1 ya mencionado.

Expone que la jurisprudencia administrativa ha reconocido la compatibilidad “de cargos”, distinguiendo entre aquellos funcionarios o autoridades que estando obligados por sus cargos, deben integrar consejos o juntas y reciben una remuneración de acuerdo al cargo, de aquellos que no están obligados en razón de sus cargos, que deben extender sus jornadas para compensar las horas que no ha podido trabajar.



«RIT»

Foja: 1

Interpone, además, excepción de prescripción en virtud de lo prescrito en los artículos 1567 N° 10, 2493, 2494, 2497, 2514 y 2515 y demás pertinentes del Código Civil y 310 del Código de Procedimiento Civil, señalando que la Mutualidad solicita la restitución de la suma total de \$44.822.973.- percibidos por el demandado, por concepto de retribuciones, pagos o dietas desde septiembre de 2015 a Marzo de 2018.

Manifiesta que la obligación a la que refiere el demandante es pura y simple, y exigible desde el momento de la publicación de la ley 20.500 en el año 2011, por lo que, en caso que se afirme otra fecha como partida de la exigibilidad, debiese haber una disposición legal que la señale. Cita jurisprudencia en apoyo de su postura, señalando que el plazo de prescripción de una obligación se cuenta desde que es posible ejercerla válidamente.

Señala que el artículo 2518 dispone que si el deudor reconoce alguna forma la obligación, o el acreedor acciona judicialmente en contra del deudor para cobrar su crédito, se configura la interrupción de la prescripción. Agrega que la interrupción natural de la obligación, de acuerdo al inciso segundo de este artículo se produce por el hecho de reconocer el deudor la obligación, expresa o tácitamente, lo que no ha ocurrido en este caso.

Finalmente, señala que todos los pagos evacuados de forma independiente con antelación al 23 de septiembre de 2016 se encuentran prescritos, siendo esta la fecha en que se encuentra extinguida su acción de cobro.

Que, el plazo que media entre la obligación prescrita y la que se pretende cobrar debería quedar reducida a las retribuciones, pagos o dietas que supuestamente percibió el demandado por su desempeño como Consejero del Consejo de Administración en el periodo que media entre el 23 de septiembre de 2016 y el 10 de marzo de 2018, por haber operado la prescripción extintiva de la obligación.

Como siguiente argumento, afirma que los pagos realizados se enmarcan en un acto de liberalidad de la Mutualidad.

Señala actitud poco ética del representante legal de la demandante, al haber participado también del Consejo de Administración de la Mutualidad, y por haberse sometido sin más a la fiscalización de la Subsecretaria de Justicia mediante su Oficio N° 4838 del 09.09.2020, al contrario de lo sostenido por la Mutualidad de Ejército y Aviación, que se opuso a esta fiscalización.

Afirma que en el Oficio N° 3848 de 09.09.2020, el demandado dijo que la naturaleza del reembolso era un reconocimiento, además, señala que en la demanda, se definió como una “retribución”, que según el diccionario de la RAE corresponde al favor u obsequio que uno recibe.

Destaca que el demandado no postuló al cargo de Presidente del Consejo de Administración de la demandada en un concurso público, ni



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: PNMMXYHXQK

Foja: 1

buscó ser electo para tal propósito; sino que le fue concedido este Alto Honor por el propio estatuto, honor que sólo se le otorga al General Director de Carabineros de Chile.

Sostiene que le corresponde a la Mutualidad demostrar que no estaba premiando y realizando un acto de liberalidad, ya que de su propio texto del líbello se desprende su postura de que no existía una obligación, por no haber fuente legal ni contractual. Agrega que el ánimo o intención de donar no resultar de la ley como uno de los requisitos de la donación.

Como siguiente punto, asevera que la Mutualidad no tiene derecho a repetir a sabiendas que lo que hacía estaba prohibido y era un objeto ilícito por el artículo 551-1 del Código Civil. Señala que la demandante atribuye la carga de la conducta de abstención de recibir este estipendio al demandado, cuando debiese haber recaído sobre ella misma, de lo cual no puede pretender ignorancia.

Manifiesta que el Código Civil reprocha esa conducta con el derecho a no repetir, y que nadie puede alegar a su favor su propia culpa, ya que, afirma, debe ser entendido como deslealtad o fraude. Menciona que el demandado no está forzado a soportar las consecuencias jurídicas de las omisiones y acciones del demandante, ya que la reforma legal que incorporó esta prohibición fue efectuada el año 2011 y la demandante siguió pagando por largos años a diferentes personas.

Asevera que la Mutualidad se trata de una persona jurídica especialísima, ya que si bien nació a la vida jurídica formalmente como una corporación de derecho privado, la actividad aseguradora ha sido su objeto principal y fue transformándose en una entidad regulada, necesaria y amparada por la legislación particular sobre seguros. Señala que el Decreto Ley N°3.057 de 1980, sustituyó el artículo 6 del DFL. N° 251, e incorporó a la definición de Compañías de Seguros a las entidades de carácter mutual organizadas sin fines de lucro, posteriormente, la Ley N° 18.660, de 1987, que modernizó el comercio de seguros, modificando el DFL. 251 de 1931, en su artículo 7, que señala que las mutualidades que estuvieran autorizadas a dicha fecha, quedan sujetas a su propia legislación y a dicho Decreto, en todo lo que no fueran incompatibles. Es decir, a partir de esa fecha tanto la Mutualidad de Carabineros y las otras de la FF.AA. fueron reconocidas legalmente como compañías de seguros, sin perder su naturaleza mutualista, es decir sin tener que convertirse en sociedad anónima, manteniendo su condición de entidad sin fines de lucro y la dejó sometida a la Fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero. Señala que no sería aplicable a entidades que aun cuando fueron constituidas como corporaciones de derecho común, cuyo régimen regulatorio con la Ley N°20.500 cambió 93 años desde de la creación de la Mutualidad de Carabineros, y tienen un régimen especial por desempeñar funciones de carácter público.



Señala que la interpretación es que con la Ley N°18.660, las Compañías de Seguros necesariamente deben convertirse en sociedades anónimas, pero, en el caso de la Mutualidad de Carabineros, se le exceptuó manteniendo su formalidad jurídica de mutual. Reitera que no le aplicarían las reformas incorporadas por la Ley N°20.500, por cuanto el objetivo de esta ley es simplificar la constitución de este tipo de personas jurídicas para fines más sociales, de participación ciudadana y no de administración de un patrimonio importante regulado por ley, como es este caso.

Afirma que la retribución que los Consejeros reciben, no se determina por la norma contenida en el artículo 551-1 del Código Civil, para las personas jurídicas sin fines de lucro, sino por la aplicación expresa de las normas contenidas en el inciso segundo, del artículo 50 del D.F.L. 251, de 1931, en virtud de las cuales los administradores y gerentes de las compañías de seguros tendrán las mismas responsabilidades y estarán sujetos a las mismas normas que los directores y gerentes de las sociedades anónimas abiertas.

Sostiene que por especialidad, a los integrantes del Consejo le eran atingentes las disposiciones de los artículos 31 y siguientes de la ley N° 18.046, y que la retribución fue establecida por la Mutualidad como un reconocimiento a la función profesional que realizaban los Consejeros en su condición de asegurados, teniendo en consideración la responsabilidad personal y solidaria que ello significaba.

Refuerza este argumento mencionando el reconocimiento legal como Organismo Auxiliar de Previsión Social, señalado en el inciso final del artículo 1° del D.L. N° 1092, de 1975, y la fiscalización a la que estaba sujeta, por parte la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, el SERNAC, y la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, que afirma reflejan las diferencias de esa Corporación de Seguros, con aquellas entidades regidas por el Título XXXIII del libro 1° del Código Civil, al estar llamados por mandato legal a administrar el seguro de vida, que en virtud de lo señalado en el D.L. 807, de 1925 y D.L. N°1.092, de 1975, deben contratar todas las personas que a cualquier título cumplan funciones para Carabineros de Chile o la PDI.

Concluye señalando que la Ley N° 20.500 no resulta aplicable a la Mutual de Carabineros, considerando que no es una asociación creada en el ámbito de la participación ciudadana destinada a influir en la gestión de los órganos que adoptan decisiones de política pública, ni actividades que considere el apoyo del Estado a través de fondos públicos.

Con fecha 25 de enero de 2022, a folio 26, la parte demandante evacuó la réplica de la demanda, haciendo notar que la demandada principal reconoció en su contestación que la Mutualidad de Carabineros se encuentra constituida jurídicamente como una persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro, que está sujeta a la supervigilancia de la ex Superintendencia de Valores y Seguros y la Subsecretaría de Justicia del



«RIT»

Foja: 1

Ministerio, y reconoce además la cantidad recibida en su calidad de consejero ascendente a \$44.822.973.-

Sobre la prescripción alegada por la demandada, señala que no han transcurrido los 5 años dispuestos por el artículo 2515 del Código Civil para el ejercicio de la acción, en consideración al régimen especial de la ley 21.226. Afirma que el demandado incurre en un error al afirmar que la obligación se hizo exigible desde la dictación de la ley 20.500, y destaca que el demandado reconoció que el período comprendido entre el 23 de septiembre de 2016 y el 10 de marzo de 2018, no estaría cubierto por la prescripción.

Sobre el argumento del demandado de que los pagos efectuados por Mutualidad de Carabineros constituyan un acto liberatorio, en base a la definición de la palabra retribución dada por el Diccionario de la RAE, señala que esta definición es referencial y no considera modismos, cultura y formas propias de cada país, por lo que corresponderá a la demandada principal probar esto conforme al artículo 1698 del Código Civil.

Señala que los pagos se realizaron mientras ejercía la investidura de Consejero, por lo que estos se efectuaban con su propio voto y aprobación, es más, la conducción directiva y administrativa de la Mutualidad recaía precisamente en el Consejo de Administración quien aprobaba los balances y pagos, para luego someterlos a la aprobación de la Junta General de Asegurados.

Menciona que, al contrario de lo expuesto por el demandado, no es efectivo que la Mutualidad se haya convertido en una entidad aseguradora de derecho privado, sin fines de lucro, regulada por las normas propios de los seguros, sino que es una corporación de derecho privado, regido por las normas pertinentes del Título XXXIII del Libro I del Código Civil y sujeta a la supervigilancia del Ministerio de Justicia de acuerdo al DL 3346, artículo 2º, letra s), Ley Orgánica del Ministerio de Justicia, y al artículo 557 del Código Civil. Señala que lo afirmado por el demandado no aplicaría al caso, ya que el artículo 7 de la Ley 18.860 dispone que a las entidades de carácter mutual se les aplica esta legislación, siempre que no se oponga o no fuere incompatible con su naturaleza mutual, es decir, corporaciones de derecho privado. En conclusión, el argumento de que estas remuneraciones serían legales por aplicarles las normas sobre seguros y sociedades anónimas, no es efectivo.

Con fecha 02 de febrero de 2022, a folio 29, rola la dúplica.

Con fecha 29 de marzo de 2022, a folio 37, se llevó a efecto la audiencia de conciliación ordenada en autos, con la sola asistencia del apoderado de ambas partes, sin llegar a acuerdo, teniéndose por frustrado en consecuencia dicho trámite legal.

Con fecha 07 de abril de 2022, a folio 41, se recibió la causa a prueba por el término legal, rindiéndose la que obra en marras.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: PNMMXYHXQK

«RIT»

Foja: 1

Con fecha 14 de abril de 2023, a folio 104, se citó a las partes a oír sentencia.

**CONSIDERANDO:**

**I.- EN CUANTO A LA DEMANDA PRINCIPAL:**

**PRIMERO:** Que, en estos autos, don René Rodrigo Ureta Toledo, en representación de Mutualidad de Carabineros de Chile, deduce acción de cobro de pesos en juicio ordinario de mayor cuantía en contra de don Bruno Arnoldo Villalobos Krumm, solicitando sea condenado a pagar la suma de \$44.822.975.- percibidos a su juicio de manera indebida, por concepto de retribuciones y dietas percibidas por haber desempeñado la función de Consejero del Consejo de Administración de la Mutualidad de Carabineros, con costas, a base de los argumentos de hecho y de derecho reseñados sucintamente en la parte expositiva de esta sentencia.

**SEGUNDO:** Que, el demandado, debidamente representado, contestó la demanda solicitando su rechazo, indicando en síntesis que su representado fue llamado a ocupar el cargo por el propio estatuto de la demandante por haber sido nombrado en su época como General Director de Carabineros de Chile, acusando que se iniciaron una serie de hostilidades, perjuicios comunicacionales, desprestigios y ofensas al honor, donde los ex consejeros, entre ellos su representado, fueron tratados como deshonestos, aseverando que nunca se prescribió ni ordenó devolver dineros, indicando que la mutualidad actuó con liberalidad y con atribución donatoria, alegando la prescripción extintiva de la acción de cobro deducida por la Mutualidad de Carabineros, indicando que la obligación al ser pura y simple, fue exigible desde el mismo momento en que se contrajo, es decir desde el año 2011, por lo que se encuentra prescrita, y que en todo caso, la obligación que se pretende cobrar debe quedar reducida al periodo que media entre el 23 de septiembre de 2016 y el 10 de marzo de 2018.

**TERCERO:** Que, ejercida una acción ordinaria de cobro de pesos, es pertinente acreditar por los medios de prueba legal la existencia del vínculo jurídico, su vigencia y determinar si el demandado debe ser condenado al pago de la cantidad de dinero solicitada.

**CUARTO:** Que, a base de las alegaciones efectuadas por las partes en el juicio, es un hecho no controvertido la circunstancia de haberse desempeñado el demandado como General Director de Carabineros de Chile, y que en razón de dicho cargo, integró el Consejo de Administración de la Mutualidad de Carabineros. Asimismo, es un hecho pacífico la circunstancia de haber percibido por parte del demandado un estipendio.

**QUINTO:** Que, en consecuencia, la controversia reside es esclarecer si es procedente la restitución del dinero percibido por el demandado al haberse desempeñado en el Consejo de Administración de la demandante, de encontrarse prescrita la acción de cobro intentada, si los actos efectuados por la demandante principal implican reconocimiento de naturaleza liberatoria y de atribución donatoria respecto de los montos reclamados,



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: PNMMXYHXQK



«RIT»

Foja: 1

todo lo anterior conforme a los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos fijados por el Tribunal en su oportunidad.

**SEXTO:** Que, es preciso indicar que en atención a los argumentos señalados en el libelo pretensor, donde el actor pretende obtener la restitución de aquello que fue desembolsado, no se da por la existencia de un vínculo contractual subyacente, sino por un pago de lo no debido, que tiene un tratamiento especial de cuasicontrato en nuestra legislación, por lo que no se cumpliría el objeto de un juicio ordinario de cobro de pesos, que supone la existencia de un vínculo subyacente. En razón de lo anterior, y a fin de evitar análisis contradictorios, se rechazará – de entrada – la pretensión de cobro de pesos, procediendo entonces a analizar la acción de pago de lo no debido y la alegación n de prescripción promovida por la parte demandada.

## **II.- EN CUANTO A LA DEMANDA SUBSIDIARIA:**

**SÉPTIMO:** Que, en forma subsidiaria, la parte demandante ha planteado la acción de restitución por pago de lo no debido, fundado en los mismos antecedentes de hecho en los cuales fundó la acción principal, y a los cuales se ha hecho referencia en la parte expositiva de esta sentencia.

**OCTAVO:** Que, la parte demandada al contestar la acción lo hace indicando los mismos argumentos señalados en el acápite segundo de esta sentencia, los que se dan por reproducidos por razones de economía procesal.

**NOVENO:** Que, en cuanto a los hechos admitidos y controvertidos, a base del análisis de los escritos principales, se estará a lo dicho en los motivos tercero y cuarto de esta sentencia, los que se dan igualmente por reproducidos.

**DÉCIMO:** Que, el artículo 2295 del Código Civil dispone: “Si el que por error ha hecho un pago, prueba que no lo debía, tiene derecho para repetir lo pagado.

Sin embargo, cuando una persona, a consecuencia de un error suyo ha pagado una deuda ajena, no tendrá derecho de repetición contra el que a consecuencia del pago ha suprimido o cancelado un título necesario para el cobro de su crédito; pero podrá intentar contra el deudor las acciones del acreedor”.

**UNDÉCIMO:** Que, cabe señalar que el pago de lo no debido, según lo dispuesto en el artículo 2285 del Código Civil, es un cuasicontrato, en el cual nace la obligación de restituir lo que se ha recibido indebidamente en pago, tiene su origen precisamente en esta figura donde ha operado una prestación, pero basada en error de concepto.

**DUODÉCIMO:** El pago de lo no debido, tiene su fundamento en un enriquecimiento sin causa, producto de un error en el pago. La obligación de restituir a la postre, es impuesta por la ley para impedir el enriquecimiento injusto del que recibe el pago a expensas de quien lo verifica.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: PNMMXMYHXQK

Foja: 1

Conforme con lo expuesto precedentemente, para que estemos en presencia de un pago de lo no debido, deben concurrir copulativamente los siguientes requisitos: a) la existencia de un pago; b) que no exista obligación y c) que dicho pago se haya hecho por error.

**DÉCIMO TERCERO:** Que, la parte demandante rindió la siguiente prueba instrumental no objetada consistente en: **A folio 68:** 1) Cuadro resumen de pagos recibidos por el demandado en su calidad de consejero, desde el mes de Octubre de 2015 y hasta el mes de diciembre de 2017, por una suma de \$44.822.973.-; 2) Cartola de cuenta corriente de Mutualidad de Carabineros de cobro de cheque serie N° 257987, de 02.10.015, por la suma de \$90.000.-; 3) Cartola de cuenta corriente de Mutualidad de Carabineros de cobro de cheque serie N° 258575, por la suma de \$90.000.-; 4) Recibo de pago por la suma de \$100.000, de fecha noviembre de 2015, suscrito por el demandado en calidad presidente del Consejo de Administración; 5) Recibo de pago por la suma de \$100.000, de fecha diciembre de 2015, suscrito por el demandado en calidad miembro del Consejo de Administración; 6) Comprobante de egreso por la suma de \$2.000.000 (incluida retención), de diciembre de 2015, suscrito por el demandado, en calidad de presidente del Consejo de Administración; 7) Recibo de pago por la suma de \$100.000, de fecha enero de 2016, suscrito por el demandado en calidad de presidente del Consejo de Administración; 8) Recibo de pago por la suma de \$100.000, de fecha febrero de 2016, suscrito por el demandado en calidad de presidente del Consejo de Administración; 9) Cartola de cuenta corriente N° 8 de Mutualidad de Carabineros de cobro de cheque serie N° 259677, de 01.03.016, por la suma de \$2.000.000.-; 10) Recibo de pago por la suma de \$100.000, de fecha abril de 2016, suscrito por el demandado en calidad de presidente del Consejo de Administración; 11) Recibo de pago por la suma de \$100.000, de fecha mayo de 2016, suscrito por el demandado en calidad de presidente del Consejo de Administración; 12) Comprobante de egreso por la suma de \$3.271.104 (incluida retención), de mayo de 2016, suscrito por el demandado, en calidad de presidente del Consejo de Administración; 13) Recibo de pago por la suma de \$100.000, de fecha junio de 2016, suscrito por el demandado en calidad de presidente del Consejo de Administración; 14) Recibo de pago por la suma de \$100.000, de fecha julio de 2016, suscrito por el demandado en calidad de presidente del Consejo de Administración; 15) Cartola de cuenta corriente N° 29 de Mutualidad de Carabineros de cobro de cheque serie N° 261662, de 26.07.016, por la suma de \$90.000.-; 16) Certificado de pagos y transferencias emitidos por el Banco de Crédito e Inversiones con fecha 07.12.020, en favor del Sr. Bruno Villalobos Krumm, por un monto total de \$31.989.139.-; 17) Copia de Acta de Sesión de Directorio de Mutualidad de Carabineros N° 3550, de fecha 28.10.015, suscrita por el demandado en calidad de presidente del Consejo



«RIT»

Foja: 1

de Administración; 18) Copia de los Estatutos de la Mutualidad de Carabineros.

**DÉCIMO CUARTO:** Que, por su parte el demandado rindió la siguiente prueba instrumental consistente en: **A folio 12:** A) Oficio 4838 de fecha 09.09.2020 de la Subsecretaría de Justicia; B) Estatutos de la Mutualidad de Carabineros.

**DÉCIMO QUINTO:** Que, previo a resolver la cuestión de fondo, huelga analizar la alegación de prescripción de la acción opuesta por el demandado, sustentada en el hecho que en atención a la dictación de la Ley N° 20.500 y su entrada en vigencia, la acción se encontraría prescrita.

Para resolver dicha alegación, es preciso indicar que la publicación de la ley – que coincide con su entrada en vigencia de conformidad a lo regulado en el artículo 7° del Código Civil – fue el 16 de febrero de 2011. La notificación de la demanda según el atestado receptorial fue el 22 de septiembre de 2021.

**DÉCIMO SEXTO:** Que, según se advierte de la demanda, los periodos sujetos a cobro serían aquellos comprendidos entre octubre de 2015 a diciembre de 2017. Tal es el caso, que no resulta entender que ha prescrito la acción. En efecto, si bien esta sentenciadora estima que en razón de la incorporación del artículo 551-1 del Código Civil, podría sobrevenir una ilegalidad – cuestión de la que se ocupará los considerandos siguientes – ya que su inciso primero dispone que en principio los directores ejercerán su cargo gratuitamente en el caso de las personas jurídicas sin fines de lucro, lo cierto es que al haberse percibido el primer pago en el año 2015 ha supuesto una hipótesis de interrupción natural de la prescripción conforme al artículo 2518 del Código Civil.

Lo anterior, por dos razones: primero, por el cargo que ostentaba el demandado al interior de la Mutualidad, y segundo, por lo prescrito en el artículo 8° del Código Civil, en cuanto a que no se puede alegar ignorancia de la ley después que haya entrado en vigencia, principalmente por los efectos que tuvo la dictación de la Ley N° 20.500 para las distintas mutualidades, principalmente la de Carabineros.

**DÉCIMO SÉPTIMO:** Que, en consecuencia, la acción para repetir por concepto de pago de lo no debido, no ha prescrito si se considera como fecha de exigibilidad de la obligación la de publicación de la Ley N° 20.500, como pretende el demandado, precisamente por la fecha en que se produjo el primer pago. Lo que no obsta a analizar la alegación subsidiaria que ha planteado, en torno al periodo de tiempo efectivamente exigible, considerando la fecha de notificación de la demanda, esto es, el 22 de septiembre de 2021.

**DÉCIMO OCTAVO:** Que, así considerando lo regulado en el artículo 2515 del Código Civil, computando el respectivo quinquenio – ya que se trata de una acción ordinaria – toda cuota anterior al 22 de



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: PNMMXYHXQK

«RIT»

Foja: 1

septiembre de 2016 ha de entenderse que su acción para perseguir el cobro se encuentra prescrita.

Es del caso, que de conformidad al detalle de pagos efectuados acompañado por el actor unido al certificado emitido por el Banco de Crédito e Inversiones asociado a la cuenta de la Mutualidad de Carabineros, el pago del mes de septiembre de 2016 fue realizado el 27 de septiembre de 2016. Y el anterior a ese el día 30 de agosto de la referida anualidad. En razón de lo anterior la acción para perseguir el pago de lo no debido se encuentra prescrita entre aquellos pagos efectuados entre octubre de 2015 y agosto de 2016, ambos meses inclusive, debiéndose entonces analizar la procedencia de la acción respecto de los pagos comprendidos entre septiembre de 2016 y diciembre de 2017, ambos meses inclusive, acogiendo parcialmente entonces la alegación de prescripción de la acción de la parte demandada.

**DÉCIMO NOVENO:** Que, en consecuencia, para pronunciarse por el fondo del asunto, es preciso indicar que la Mutualidad de Carabineros es una persona jurídica sin fines de lucro, así lo declaran sus estatutos en su artículo 1°. Para los efectos legales, es una corporación de derecho privado regida por el Título XXXIII del Libro I del Código Civil, y sus estatutos originarios fueron aprobados mediante Decreto N° 283 del año 1918 del entonces Ministerio de Justicia, siendo posteriormente modificado en reiteradas oportunidades conforme al devenir del tiempo. El artículo 2° de los estatutos, refiere que la regulación aplicable está comprendida, entre otros, por los propios estatutos, el Decreto Ley N° 807 de 1925, el Decreto Ley N° 1092 de 1975, el DFL N° 251 de 1931, la Ley N° 21.000 y en lo pertinente el Código de Comercio y el Código Civil. Con todo, la aplicación de las reglas del aludido Título del Código Civil al que más arriba se ha hecho referencia, es una cuestión que jurídicamente ha sido resuelta y establecida por la Contraloría General de la República mediante Dictamen N° 26247-18.

**VIGÉSIMO:** Que, esta sentenciadora no puede obviar lo que el organismo de control ha analizado en el aludido dictamen, mencionado además por el demandado en su exposición al contestar la demanda, ya que más allá de las aprehensiones que el demandado ha señalado en torno al contexto en donde surgieron los pronunciamientos por parte del ente de control administrativo, se trata de un dictamen que a la fecha de dictación de esta sentencia no ha sido reconsiderado ni dejado sin efecto, por lo que su interpretación no solo es vinculante para los órganos de la administración, sino que debe ser considerado por esta sentenciadora para resolver el asunto.

**VIGÉSIMO PRIMERO:** Que, como ya se adelantó, el demandado no puede alegar ignorancia de la Ley, ni pretender que por el hecho de que se hayan efectuado estos pagos con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley N° 20.500 que modificó en lo pertinente el Título XXXIII del Libro



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: PNMMXYHXQK

Foja: 1

I del Código Civil, estos hayan estado justificados, porque si bien los estatutos vigentes a esa época podrían haberlo autorizado, lo cierto es que sobrevino una ilegalidad y el pago del referido estipendio no se avenía con la regulación establecida en virtud de la Ley N° 20.500 y lo prescrito en el nuevo artículo 551-1 del Código Civil.

A mayor abundamiento, el problema no solo se da por una ilegalidad sobreviniente, sino porque tampoco resultaba aplicable el inciso segundo del artículo 551-1 del Código Civil, pues tal como zanjó la Contraloría General de la República en el Dictamen N° 26247-18, la administración de la MUTUCAR era ejercida por un Consejo de Administración compuesto en su mayoría por autoridades y funcionarios en servicio activo de ambas instituciones policiales, en el caso del demandado por derecho propio al haber ostentado el cargo de General Director de Carabineros conforme a los estatutos vigentes a la época del pronunciamiento del aludido dictamen, ya que en la actualidad conforme al artículo 14 de los estatutos, eso ya no ocurre.

**VIGÉSIMO SEGUNDO:** Que, en línea con lo dicho en el acápite precedente, el aludido Dictamen determinó que *“las autoridades y funcionarios que integran los referidos consejos directivos no deben recibir un estipendio por ejercer dicha actividad, toda vez que la realizan por el solo hecho de desempeñar un cargo público en aquellos organismos, o por el hecho que, perteneciendo a estos últimos, son designados por una de dichas autoridades”*, es decir, en virtud de lo regulado en el artículo 551-1 del Código Civil en su inciso 1° el desempeño de los directores de la MUTUCAR debe ser gratuito, sumado al hecho de que quienes sirven el cargo, son a su vez funcionarios de Carabineros de Chile, siendo incompatible con la función pública que desempeñan percibir un estipendio por tal función. Es entonces tanto la ilegalidad sobreviniente como lo zanjado por la Contraloría General de la República razones suficientes para estimar que en la especie los requisitos de la acción de restitución por pago de lo no debido, ha de ser acogida.

**VIGÉSIMO TERCERO:** Que, en consecuencia, la alegación del demandado de asumir que el pago recibido ha sido un acto de liberalidad de la actora o que tiene atribución donatoria, no es jurídicamente procedente. En efecto, estimarlo como una mera liberalidad implicaría amparar un actuar en contravención a la ley, lo que no resulta sostenible, y de otro lado, estimar que el acto constituiría una donación, es abiertamente improcedente: el artículo 2299 del Código Civil es claro en indicar que el que da lo que no debe no se presume que lo dona, a menos de probarse que tuvo perfecto conocimiento de lo que hacía, y la evidencia de los hechos, conforme a la prueba rendida y las alegaciones efectuadas por las partes en sus escritos principales, permite establecer que los pagos efectuados por la actora al demandado no tuvieron un carácter de donación, sino la



Foja: 1

aplicación de estatutos que a la fecha en que se devengaron los pagos eran contra la ley.

**VIGÉSIMO CUARTO:** Que, habiendo entonces prosperado parcialmente la alegación de prescripción de la acción respecto de aquellos pagos efectuados por la actora entre octubre de 2015 y agosto de 2016, resulta procedente entonces la pretensión de cobro de aquellas sumas pagadas entre septiembre de 2016 y diciembre de 2017, que conforme al detalle acompañado por la actora, las cartolas de cuenta corriente y el certificado emitido por el Banco de Crédito e Inversiones, permiten establecer que el monto afecto a restitución, alcanza la suma de \$30.351.871.-

**VIGÉSIMO QUINTO:** Que, en consecuencia, el demandado deberá restituir a la demandante la suma de \$30.351.871.- por concepto de estipendios erradamente percibidos en su rol de Consejero de la Mutualidad de Carabineros, correspondiente al periodo que va desde septiembre de 2016 a diciembre de 2017, ambos meses inclusive, en el plazo de 30 días contados desde que la sentencia se encuentre firme y ejecutoriada.

**VIGÉSIMO SEXTO:** Que, la suma ordenada restituir será debidamente reajustada desde la época de interposición de la demanda, hasta la época de su pago efectivo, lo que será determinado por liquidación que practique la señora Secretaria del Tribunal en la etapa de cumplimiento de la sentencia.

**VIGÉSIMO SÉPTIMO:** Que, no habiendo resultado completamente vencida la parte demandada, no será condenada al pago de las costas de la causa.

Por estas consideraciones, y visto en lo dispuesto en los artículos 1551, 1698, 2295 y siguientes, 2492, 2515, 2518 todos del Código Civil; y artículos 144, 160, 170, 254 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se declara:

I.- Que se **rechaza** la demanda principal de cobro de pesos deducida por don René Rodrigo Ureta Toledo, en representación de Mutualidad de Carabineros de Chile en contra de don Bruno Arnoldo Villalobos Krumm, por resultar jurídicamente improcedente;

II.- Que se acoge parcialmente la alegación de prescripción de la acción promovida por la parte demandada, declarándose prescrita la acción para perseguir el cobro de los estipendios pagados entre octubre de 2015 a agosto de 2016, ambos meses inclusive;

III.- Que **se acoge parcialmente la acción de pago de lo no debido** interpuesta por don René Rodrigo Ureta Toledo, en representación de Mutualidad de Carabineros de Chile en contra de don Bruno Arnoldo Villalobos Krumm, debiendo este último restituir la suma de \$30.351.871.- por concepto de estipendios erradamente percibidos en su rol de Consejero de la Mutualidad de Carabineros, correspondiente al periodo que va desde septiembre de 2016 a diciembre de 2017, ambos meses inclusive, en el plazo



«RIT»

Foja: 1

de 30 días contados desde que la sentencia se encuentre firme y ejecutoriada;

IV.- Que la suma ordenada pagar será debidamente reajustada entre la época de interposición de la demanda hasta la de su pago efectivo en la forma señalada en el motivo 26° de esta sentencia;

V.- Que no se condena en costas al demandado por no haber resultado completamente vencido.

Regístrese y Notifíquese.

**DECTADA POR DOÑA ROCÍO PÉREZ GAMBOA, JUEZA  
TITULAR.**

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, dieciocho de Marzo de dos mil veinticuatro**



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: PNMMXYHXQK